

Legislación Nacional

DECRETO 1158/2004 RESIDUOS Residuos domiciliarios. Gestión integral. Presupuestos mínimos de protección ambiental. Veto parcial del 3/9/2004; publ. 7/9/2004 Visto el proyecto de ley registrado bajo el 25916 sancionado por el Congreso de la Nación el día 4 de agosto de 2004, y Considerando: Que el citado proyecto de ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la "Gestión integral de residuos domiciliarios". Que el cap. VII del proyecto de ley regula lo atinente a su autoridad de aplicación, estableciéndose, en el art. 24 autoridad de aplicación, en el ámbito de su jurisdicción, el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional. Que, tratándose de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional, no cabe contraponer, en orden a la ejecución de la ley, la jurisdicción de las autoridades locales (denominadas autoridades "competentes" en el texto de cuya promulgación se trata) a la jurisdicción del Gobierno federal, normalmente circunscripta a supuestos de afectación interjurisdiccional del ambiente y al ámbito físico de los establecimientos y otros lugares sometidos a jurisdicción nacional. Que, en efecto, la Constitución ha reservado la competencia para ejecutar las leyes de presupuestos mínimos a las jurisdicciones locales; al Gobierno federal, a través de su autoridad ambiental, le corresponde aplicar la ley de presupuestos mínimos no en el sentido estricto de ejecutar una ley federal, sino en un sentido institucional y político -consustanciado con el espíritu del párr. 3 de la cláusula ambiental de la Constitución-, desarrollando funciones que, como las enumeradas en el art. 25 del proyecto de ley en cuestión, se relacionan con la formulación de políticas ambientales de carácter nacional, antes que con la ejecución administrativa de las cláusulas de la ley. Que, además de esa importante razón conceptual y de hermenéutica constitucional, si el texto se promulgara conteniendo la expresión "...en el ámbito de su jurisdicción..." daría lugar a equívocos en su cumplimiento, pues las funciones especificadas en el art. 25 podrían interpretarse como circunscriptas a aquellos supuestos en los que hubiera afectación interjurisdiccional del ambiente o en los que las actividades reguladas en el proyecto de ley se desarrollaran en establecimientos o lugares sometidos a jurisdicción nacional. Que el cap. VIII del proyecto de ley se refiere a las infracciones y sanciones. Que, en dicho marco, fijar el plazo de prescripción para las acciones sancionatorias de las autoridades competentes locales, como lo hace el art. 30, se considera como invadiendo la competencia que se han reservado las provincias de definir sus instituciones de derecho administrativo. Aunque la competencia delegada a la Nación para dictar presupuestos mínimos de protección ambiental incluye la potestad de establecer, como principio de política ambiental nacional, que las infracciones a los presupuestos mínimos entrañarán responsabilidad en el orden administrativo, es del estricto resorte provincial, con motivo del dictado de las normas "complementarias" a que alude el párr. 3 del art. 41 de la Constitución Nacional, fijar el plazo de prescripción de las respectivas acciones sancionatorias. Si se tratara de figuras penales, la Nación podría fijar un plazo de prescripción (art. 75, inc. 12, Constitución Nacional), pero no sucede ello con las penalidades administrativas, que pertenecen al ámbito del derecho administrativo, el cual es de naturaleza local. Que el cap. IX del proyecto de ley se refiere a los plazos máximos con los que contarán las jurisdicciones locales para adecuar a las disposiciones establecidas en la ley la gestión integral de residuos domiciliarios que se lleva a cabo en ellas; según el art. 33, dicho plazo será de diez (10) años en materia de disposición final de residuos domiciliarios y, según el art. 34, el plazo será de quince (15) años para las restantes etapas de la gestión integral de los residuos. Que los plazos contemplados en dichas previsiones se oponen al principio de congruencia establecido en el art. 4 de la Ley General de Ambiente 25675, conforme al cual la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijados en dicha ley y en toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental nacional, como es el caso de una ley sectorial de presupuestos mínimos. Que, por otra parte, siendo las leyes de presupuestos mínimos de orden público y, además, comportando los presupuestos mínimos una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental (v. art. 6, ley 25675), se advierte que no resulta adecuado establecer plazos máximos que puedan diferir su cumplimiento cuando corresponde a las jurisdicciones locales dictar las normas complementarias y de ejecución pertinentes para asegurar a sus respectivos habitantes el goce efectivo de aquella tutela ambiental. Que el art. 37 del proyecto de ley -dentro del cap. X sobre disposiciones complementarias- prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países al territorio nacional. Que la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países se halla actualmente prohibida dentro de los términos del decreto 181 de fecha 24 de enero de 1992. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente es autoridad de aplicación de dicho decreto, a los fines de autorizar el ingreso de aquellos residuos que, por estar amparados en certificaciones de inocuidad ambiental y sanitaria, no representan un peligro o un riesgo para el ambiente, la calidad de vida de las personas y los recursos naturales. Que una prohibición absoluta de importación tendría un impacto negativo en el sector industrial del país que, hasta ahora, y de acuerdo con la normativa vigente, ha importado en cantidad y calidad muy significativas residuos no peligrosos como insumos de procesos industriales. Que aunque una

prohibición absoluta de ingreso tendría la ventaja de promover un mayor desarrollo del reciclado de residuos locales, importantes limitaciones tecnológicas y económicas impedirían hacerlo en el corto plazo, lo cual redundaría en un perjuicio para el sector industrial antes mencionado, perjuicio que no resulta ser ambientalmente exigible en atención a que los residuos que actualmente se importan y utilizan al amparo del decreto 181/1992 , son inocuos ambiental y sanitariamente, no comprometiendo el bien jurídico protegido en el proyecto legislativo en cuestión, que es el ambiente y la calidad de vida de la población. Que, por ende, observar lo dispuesto en el art. 37 del proyecto de ley 25916 no implicaría dejar autorizado, en términos generales, el ingreso o importación de residuos domiciliarios, sino mantener vigente un régimen de prohibición más razonable y sustentable. Que la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación. Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el art. 80 de la Constitución Nacional. Por ello, **El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros decreta:** **Art. 1.º** Obsérvase, en el art. 24 del proyecto de ley registrado bajo el 25916, la expresión "...en el ámbito de su jurisdicción...". **Art. 2.º** Obsérvense los arts. 30 , 33 , 34 y 37 del proyecto de ley registrado bajo el 25916. **Art. 3.º** Con las salvedades establecidas en los artículos anteriores, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el 25916 . **Art. 4.º** Dése cuenta al Congreso de la Nación. **Art. 5.º** Comuníquese, etc. **Kirchner - Fernández - Lavagna - González García - De Vido - Fernández - Filmus - Pampuro - Rosatti - Kirchner - Tomada** Referencias: Const. Nac. : 199-A-26 - L 25675 : 200-D-4836 - D 181/1992 : 19-A-162.